

LA DESCLASIFICACIÓN SOCIAL EN FRANCIA: ¿MIEDO O REALIDAD?

Eguzki Urteaga

Universidad del País Vasco
Departamento de Sociología 1

Resumen: *La noción de desclasificación social está omnipresente en todas las bocas y bajo las plumas de numerosos políticos, comentaristas e incluso ciertos investigadores. En realidad esconde dos realidades que conviene distinguir. La primera, y la más evidente, se refiere a las rupturas que conducen al deterioro de las situaciones sociales de unos individuos. La segunda consiste en el temor de la desclasificación, es decir en una angustia profunda que afecta a una cantidad creciente de ciudadanos franceses que se fundamenta sobre la convicción de que nadie está protegido ante el riesgo de perder su empleo, su salario, sus prerrogativas: en definitiva su estatus social. La crisis actual lleva esta angustia a su paroxismo, lo que conduce a una competencia generaliza que genera frustraciones. A partir de esta constatación se trata de elaborar una sociología de las recesiones.*

Palabras clave: *desclasificación social – temor – realidad - Francia.*

Abstract: *The notion of social declassification is omnipresent in all the mouths and under the pens of many politicians, commentators and including a few researchers. Actually he hides two realities that it is necessary to distinguish. The first one, and the most evident, is the deterioration of the social situation of a few individuals. The second one consists in the declassification, that is to say in a distress deep that concerns an increasing quantity of French citizens that is based on the conviction that nobody is protected in front of the risk of losing his employment, his salary, his prerogatives: definitively his social status. The actual crisis drives this distress to his paroxysm, which he leads to a generalised competition that generates frustrations. From this observation, this article is trying of elaborating a sociology of the recessions.*

Key words: *social declassification - dread - reality - France.*

I. INTRODUCCIÓN

La desclasificación es un término que se ha extendido y que designa a un fenómeno de ruptura que conduce un individuo a perder su posición social. En Francia, más de 300.000 trabajadores, protegidos anteriormente por un contrato indefinido, han sido despedidos a lo largo del año 2009 y se encuentran hoy en día en

el paro, con la perspectiva de unos largos meses de incertidumbre financiera y psicológica. Un número tan importante de jóvenes acaba de salir del sistema educativo con un título académico, pero, ellos también, se encuentran en el paro. Solo tienen como horizonte una sucesión de contratos temporales mal pagados que no mantienen ningún vínculo con las cualificaciones

adquiridas a lo largo de su carrera universitaria. La noción de desclasificación reduce, por lo tanto, una realidad efectiva, aunque deba ser distinguida del miedo de la desclasificación.

Esta angustia, compartida por un número creciente de franceses, se basa sobre la convicción de que nadie está protegido, de que una espada de Damocles pesa sobre los trabajadores y sus familias, de que cualquier persona corre el riesgo en cualquier momento de perder su empleo, su salario, sus prerrogativas, en definitiva su estatus social. El temor ante la desclasificación no se sitúa en las márgenes de la sociedad sino en su corazón. Afecta a los obreros, empleados, trabajadores precarios, pero también a las clases medias y altas, es decir a los que se benefician de los mejores estatus y de las protecciones más eficaces. Determina la percepción de sí mismo, las formas de la confianza, las expectativas y la representación que uno tiene del futuro.

La desclasificación y el temor de la desclasificación son dos fenómenos que no son ni de la misma naturaleza, ni de la misma amplitud. Conviene no confundirlos si se quiere comprender los problemas de los que sufre actualmente la sociedad francesa. Así, en 2007, el INSEE registraba 14600 personas sin hogar. Si se tiene en cuenta la cifra de 100.000 personas, avanzada por las asociaciones de ayuda a los sin domicilio, se calcula que el 0,16% de la población vive en la calle. No obstante, según un sondeo realizado en 2006, el 48% de los franceses piensan que podrían convertirse algún día en un sin domicilio. Dos años más tarde, con la crisis, este temor se ha incrementado todavía más, ya que el 60% de las personas se sienten amenazadas hoy en día.

Si la desclasificación es un hecho que es medible estadísticamente y que afecta en primer lugar a los colectivos vulnerables, el miedo de la desclasificación es de otra naturaleza: se trata de un fenómeno global y difuso que, estructurando el imaginario de

los individuos y de los grupos, orienta numerosos comportamientos y movimientos sociales. No tiene que ver con una ideología abstracta ya que, por el contrario, se fundamenta sobre un conjunto de hechos reales, aunque extrapole el sentido e incremente su amplitud. Es una variable clave para dar cuenta del funcionamiento de la política, de la economía y de la sociedad francesa. Este trabajo aspira precisamente a analizar su contenido y sus efectos.

Antes de comprender por qué esta angustia se ha extendido tanto, conviene tomar la medida del drama personal y familiar que constituye la desclasificación en la Francia de hoy en día, especialmente cuando afecta a los asalariados en la mitad de su carrera profesional. En un informe entregado en julio de 2009 a la secretaria de Estado a la prospectiva, los investigadores del Centro de análisis estratégico han puesto de manifiesto la complejidad del fenómeno. Ser despedido, en Francia, es en primer lugar padecer un periodo de desempleo que es uno de los más largos de los países desarrollados; en segundo lugar, es estar condenado a encontrar unas formas precarias y deterioradas de empleo, sin vínculo alguno con el estatus anterior; y, en tercer lugar, semejante relegación tiene amplias consecuencias financieras y psicológicas. En este sentido, la desclasificación afecta en prioridad a los obreros y a los empleados, especialmente en las PME, pero afecta cada vez más a los cuadros del sector privado, cuyos estatus, anteriormente sólidos, se han fragilizado a medida que sus empleos se normalizaban. Los funcionarios siguen estando protegidos ante estas formas radicales de desclasificación, pero no están protegidos ante el cuestionamiento progresivo de sus ventajas estatutarias, ni frente al progresivo deterioro de sus condiciones de trabajo, agravados por las jubilaciones no sustituidas y las reducciones de plantilla.

Que trabajen en el sector público o privado, que sean asalariados o independientes, las familias están amenazadas por otra

forma de desclasificación: la que sobreviene cuando los hijos no consiguen entrar en el mercado laboral y en la sociedad. Este riesgo es especialmente elevado en Francia y, cuando acontece, se produce de manera desigual entre los que disponen de títulos académicos y los que carecen de ellos. En 2008, entre los jóvenes que han salido de la escuela desde hace menos de 5 años, el 47% de los no titulados se encontraban en el paro frente a apenas el 7% de los titulados de la enseñanza superior, es decir una diferencia de 40 puntos. El fracaso escolar nunca ha sido tan perjudicial.

Por lo tanto, existe una realidad de la desclasificación que afecta al equilibrio de los individuos y de las familias además de debilitar los fundamentos del pacto social. No obstante, la inmensa mayoría de los franceses se encuentra protegida ante una desclasificación efectiva. Si la desclasificación se encuentra en el centro de las preocupaciones de un gran número de personas, no es porque ellas o sus familiares la han padecido, sino porque su coste potencial jamás ha sido tan importante. Lo que se podría perder es tan fundamental y constituye una tal base para la sociedad gala, que este riesgo es suficiente para alimentar una ansiedad de tipo existencial. Los países en los cuales las pérdidas de empleo están mejor protegidas y los estatus están más consolidados son precisamente aquellos en los cuales la probabilidad de encontrar de nuevo un empleo protegido es proporcionalmente la más baja.

La noción francesa de desclasificación no tiene equivalente en los países escandinavos y anglosajones. Es sintomática de una sociedad desigual y jerarquizada, aristocrática en ciertos aspectos, donde los rangos y dignidades se conceden para la vida y tienen vocación a permanecer en la familia. La transmisión hereditaria de los oficios ha desaparecido con la Revolución de 1789, pero la dignidad social sigue estando vinculada a la conquista y a la conservación de un estatus. El miedo de la desclasificación es una pasión de las socie-

dades de estatus que están inmersas en un proceso de democratización, cuando los rangos y las dignidades dejan de estar protegidos por la herencia, pero deben estar puestos en juego en cada generación. Es la razón por la cual la difusión extraordinaria de este temor encuentra su punto de origen en las actitudes de los privilegiados y de los más protegidos. Lo que se desarrolla en primer lugar hoy en día no es la desclasificación efectiva de las clases populares, sino el miedo de la desclasificación de las clases medias y superiores, con todo lo que ello implica como comportamiento segregativo en materia residencial y educativa.

La crisis económica actual, como las de 1974 y 1993, aumenta esta preocupación. Cuando afectan a una sociedad de estatus como la francesa, las recesiones tienen como primer efecto de incrementar las desigualdades entre las personas que tienen una cierta antigüedad en el empleo y las personas que se encuentran todavía en la periferia del mercado laboral, especialmente los jóvenes. Las filas de espera delante de las empresas se incrementan, la duración del desempleo aumenta y el abismo se incrementa de manera vertiginosa entre las personas protegidas y las demás. El espacio social se polariza y el valor de lo que podría perder en caso de despido o de fracaso escolar aumenta en unas proporciones inéditas. Aumentando súbitamente el valor de lo que está en juego, las recesiones crean un *choc* psicológico cuya onda expansiva se entiende más allá de esta pequeña minoría que está efectivamente afectada por la desclasificación. Ante la amplitud de lo que costaría un fracaso escolar o una desclasificación social, cada uno moviliza todos los recursos que tiene a su disposición para alejar este espectro, lo que incrementa la competencia en las escuelas, en el mercado residencial y en las empresas. Por lo tanto, no es sorprendente si estas tensiones tienen también unas repercusiones en el ámbito social y político: defensa del estatus, atracción para los sindicatos más reivindi-

cativos, pregnancia de las ideologías antiliberales, tentación del proteccionismo, desconfianza hacia Europa. Lo que explica el desarrollo de estas sensibilidades, no es tanto la desclasificación efectiva sino el endurecimiento ante la perspectiva e incluso la posibilidad de la desclasificación.

Los descubrimientos científicos, los avances técnicos y el crecimiento económico son unos factores de cambio social, pero los periodos de estagnación juegan un papel primordial en la elaboración de las sociedades. Cuando acontecen, las recesiones tienen como primera consecuencia de aumentar la polarización social y el coste que representa la pérdida de un estatus protegido. Este efecto social provoca la difusión, en toda la sociedad, de un miedo de la desclasificación (efecto psicológico), lo cual desencadena a su vez un conjunto de decisiones y de comportamientos que remodelan completamente el paisaje ideológico (efecto político), incluso mucho tiempo después de que la recesión haya terminado. Es precisamente ahí donde se sitúan sus efectos más duraderos. La experiencia universalmente compartida no es, por lo tanto, la de la desclasificación, sino la del temor de la desclasificación. Los comportamientos sociales y políticos están a veces motivados por el resentimiento de los que lo han perdido todo, pero, más a menudo, están alimentados por la ansiedad de aquellos cuyo estatus podría estar amenazado, aunque sea de manera indirecta y lejana.

Para estudiar este fenómeno, observable durante las grandes crisis que ha conocido Francia, como las de 1974 y 1993, conviene diseñar una sociología de las recesiones, que solo se puede desplegar a largo plazo y en un triple registro social, psicológico y político. Para ello, este trabajo se fundamenta sobre la *Enquesta empleo* del INSEE, que cubre el periodo 1975-2008 y ofrece informaciones fundamentales sobre el rol respectivo del origen social y de los títulos académicos en el momento de la inserción en el mer-

cado laboral. Se observa entonces hasta qué punto las recesiones influyen sobre los comportamientos y las expectativas, especialmente en el seno de las generaciones que los han padecido en el momento de entrar en el mercado laboral. En definitiva, analiza hasta qué punto las recesiones, fuentes de mucha ansiedad, moldean las sociedades acentuando su propensión al pesimismo y al conservadurismo. Avanzamos la hipótesis según la cual este escenario se está reproduciendo con la crisis actual.

Características de la crisis

La mejor manera de poner de manifiesto las características de la crisis consiste en analizar una de ellas. En el inicio de los años 1990, Francia atraviesa una de las peores recesiones de su historia. Entre el final de 1992 y el inicio de 1993, el mercado inmobiliario se invierte, el sector de la construcción se derrumba, el empleo total retrocede de más del 2,5% y el desempleo se incrementa. Una de las características fundamentales de esta recesión es que acontece justo después de una democratización sin precedentes del sistema educativo, sobre todo secundario e universitario. Es la primera crisis que afecta a la sociedad francesa después de que haya entrado en la era de la enseñanza de masas. Este periodo sigue siendo hasta ahora el único momento de la historia gala que permite aclarar las consecuencias de una recesión sobre las elecciones de una sociedad que ha democratizado el acceso a los carreras universitarias. De hecho, el *choc* ha modificado duraderamente la relación de la sociedad francesa al sistema educativo y al empleo.

Las desilusiones de la democratización escolar

La recesión del inicio de los años 1990 tiene un impacto muy violento, especialmente sobre la juventud. En apenas dos años, entre 1992 y 1994, el número de

desempleados entre los jóvenes que han abandonado el sistema educativo desde hace menos de cinco años se incrementa de más del 30%. La onda expansiva es más profunda en los sectores industriales (los más vulnerables ante la competencia internacional) que en el sector servicios y, de hecho, afecta más duraderamente a los jóvenes varones que a las jóvenes mujeres. Por primera vez, el desempleo afecta a los jóvenes diplomados de la enseñanza superior. La proporción de parados entre estos últimos se duplica en algunos años. Residual en el inicio de los años 1990, la tasa de desempleo supera el 10% a partir de 1994. La recesión sorprende completamente a los políticos y choca con la política de democratización escolar y universitaria promovida por Jean-Pierre Chevènement en la mitad de los años 1980 y proseguida por René Monory y Lionel Jospin hasta la mitad de los años 1990. Esta política había sido concebida como una solución al desempleo de masas y había permitido multiplicar por dos el número de titulados de la enseñanza superior en el seno de una misma generación. Por lo cual, jamás Francia ha invertido tanto en la educación desde la Segunda Guerra Mundial y nunca ha conocido semejante crisis.

El incremento brutal del desempleo en el sector privado tiene como consecuencia de orientar a los jóvenes titulados hacia la función pública. No obstante, contrariamente a lo que podría acontecer en el sector privado, la afluencia de candidatos titulados en la función pública no modifica ni el volumen ni la naturaleza de los empleos que se crean en su seno: su número y su calidad siguen siendo los mismos. Tanto antes como después de la recesión, la función pública es capaz de integrar alrededor del 10% de cada generación. Resulta de todo ello un formidable atasco y la aparición de nuevas generaciones de funcionarios demasiado titulados: son a la vez más cualificados que su *alter ego* del sector privado y que sus mayores.

La función pública como refugio

Para comprender la amplitud y el origen de estas transformaciones, conviene analizar el periodo que precede la recesión. A lo largo de los años 1980, la afluencia de jóvenes titulados en la economía ya es notable, pero está absorbida esencialmente por el sector privado. El "giro del rigor", que los socialistas han tenido que tomar en el inicio de los años 1980, ha abierto la vía a una rehabilitación ideológica de la empresa y de la iniciativa privada. Si se considera la población juvenil que ha salido del sistema educativo desde hace menos de cinco años, se observa a la vez un incremento muy importante del número de titulados de la enseñanza superior en su seno y una afluencia masiva de estos nuevos integrantes hacia el sector privado. En 1992, en la víspera de la recesión, se contabilizan 120.000 jóvenes adicionales que gozan de un título universitario (bachillerato + 2) que en 1982, de los cuales 105.000 han integrado el sector privado y solamente 15.000 el sector público. A lo largo de los diez años que preceden la recesión, el número de diplomados de la enseñanza superior entre los nuevos entrantes en el mercado laboral se ha multiplicado por dos en el sector privado mientras que ha aumentado de apenas el 15% en la función pública.

Si los empleos ofrecidos a los jóvenes por las empresas del sector privado hubiesen sido las mismas a lo largo de este periodo, semejante afluencia de titulados se habría acompañado de una desclasificación masiva. Pero, no es lo que ha acontecido. Por el contrario, a lo largo de la década, las empresas privadas se transforman a medida que acogen a nuevos titulados, y las oportunidades que tienen estos últimos de acceder a unos empleos muy cualificados no disminuyen. Para los titulados de la enseñanza superior contratados por el sector privado, la probabilidad de alcanzar el estatus de cuadro en los cinco años que siguen la salida del sistema educativo sigue siendo estable a lo largo de este periodo.

Antes de la recesión, la inmensa mayoría de los nuevos titulados de la enseñanza superior se orienta hacia el sector privado y sus posibilidades de acceder rápidamente a unos puestos de responsabilidad siguen siendo intactas a pesar de la multiplicación de los candidatos de calidad en ese mismo sector.

Todo cambia con la recesión. Bajo el efecto de la democratización del liceo, la afluencia de titulados prosigue e incluso se acelera, pero una parte muy importante de los nuevos entrantes se aleja del sector privado para privilegiar el sector público. El desempleo y la precariedad laboral se han convertido en una amenaza efectiva y el estatus de la función pública representa un atractivo considerable.

Si se analiza la década posterior a la recesión (1993-2003), se percibe que el número de titulados de la enseñanza superior entre los nuevos entrantes se duplica de nuevo en el sector privado, pasando de 220.000 a 440.000, así como en el sector público, pasando de 120.000 a 240.000. Ante la recesión, un número importante de jóvenes titulados de la enseñanza superior busca desde entonces un refugio en la función pública. Pero, la función pública no obedece en absoluto a las mismas reglas que las del sector privado. Los empleos ofrecidos por el sector público corresponden lo más a menudo a unas necesidades de renovación y se determinan independientemente del nivel de formación de los candidatos. No es porque los candidatos aumentan súbitamente en número y en calidad que se observa una inflexión en el número y en el tipo de puestos de trabajo propuestos a los jóvenes funcionarios.

Por lo tanto, la afluencia de titulados después de 1993 se traduce en el sector público por un alargamiento de las filas de espera para acceder a los puestos de cuadro. En el periodo que precede la recesión, el 64% de los jóvenes funcionarios titulados de la enseñanza superior consiguen ocupar semejante puesto en los cinco años

que siguen su salida del sistema educativo. Diez años más tarde, la competición se ha endurecido considerablemente ya que solo forman el 43%. La función pública constituye una protección ante el riesgo de desempleo, pero el precio a pagar es importante con un notable colapso y una ralentización considerable en el acceso a los puestos de responsabilidad.

No sucede lo mismo en el sector privado, mientras que la oleada de nuevos titulados es todavía más fuerte después de la recesión. En 1993, el 59% de los jóvenes asalariados titulados han conseguido ocupar un puesto de cuadro en los cinco años que siguen su inserción en el mercado laboral. En 2003, siguen formando cerca del 53%. Las posibilidades de acceder rápidamente a los puestos de dirección han bajado ligeramente, pero menos que en el sector público. Si, antes de la recesión, el acceso a los puestos de cuadro era tan rápido en el sector público como en el privado, después de la recesión, se ha ralentizado en el sector público.

El fundamento de la fractura entre los sectores público y privado

En el seno del sector competitivo, unas empresas nacen y desaparecen todos los días. Asimismo, en el seno de las empresas, los empleos están sometidos a unas fluctuaciones importantes. Un gran número de empresas del sector privado continúan contratando vigorosamente durante las peores recesiones así como una fracción tan importante continúa destruyendo empleos durante los periodos de crecimiento. Incluso si no parece acontecer nada y si el nivel de empleo total sigue siendo estable, cada año se ofrecen millones de empleos¹. En esta continua mezcla y renovación de la actividad, la naturaleza y la calidad de los empleos que las empresas con capaces de crear dependen estrechamente del nivel de formación de los candidatos presentes en el mercado laboral. Las empresas se transforman con la elevación de la forma-

ción de los jóvenes que se presentan ante las puertas de las empresas. Es la manera más simple y coherente de explicar por qué, a lo largo de las décadas 1982-1992 y 1993-2003, las empresas han conseguido integrar las oleadas sucesivas de nuevos titulados confiándoles unos puestos de trabajo cada vez más cualificados.

Otra interpretación consistiría en decir que existe una pura coincidencia entre el ritmo de transformación de las necesidades del sistema productivo y el ritmo al que el sistema educativo ha enviado nuevos titulados al mercado laboral. Según esta hipótesis, escuelas y empresas obedecen a unas leyes independientes, pero puede que coincidan a veces. Sería precisamente el caso de los años que han precedido y seguido la recesión. Conviene aceptar la idea de una adecuación milagrosa entre la política educativa y las transformaciones productivas durante el periodo que precede la recesión, pero conviene igualmente admitir que las necesidades del sistema productivo se han incrementado posteriormente en el momento exacto en el cual, tras una decisión política, el flujo de los titulados ha aumentado poco a poco.

De hecho, cuando se comparan los años posteriores a 1993 con la década que precede, se observa que el número de jóvenes titulados de la enseñanza superior que afluye en el sector privado ha sido multiplicado por dos (como consecuencia de la democratización escolar del final de los años 1980), pero se constata que el número de empleos de cuadros creados para acoger a estos jóvenes titulados se ha multiplicado en unas proporciones similares. En otras palabras, los flujos de empleos creados para acoger a los jóvenes han cambiado de naturaleza en el mismo momento en el que la democratización modificaba su nivel de formación. Es la razón por la cual no se observa ninguna verdadera desclasificación de los jóvenes que integran el sector privado y parece difícil considerar este hecho como el simple fruto del azar.

La dinámica es muy diferente en el sector público donde el brutal incremento de los flujos de titulados después de 1993 no se ha acompañado de ningún cambio notable en el ritmo de creación de puestos de cuadro. El número de empleos con estatus de la función pública propuesto cada año a los jóvenes sigue sin cambiar durante y después de la recesión de 1993, mientras que, simultáneamente, el nivel de cualificación de los candidatos se eleva considerablemente.

En semejante contexto, solamente los más titulados consiguen superar los obstáculos que llevan hasta los puestos de cuadro de la función pública. Las nuevas generaciones de funcionarios están sobretitulados no solamente con respecto a las generaciones precedentes sino también con respecto a las nuevas generaciones del sector privado, lo que constituye una fuente potencial de frustración. Se trata de la otra consecuencia de la recesión: durante los años que la preceden, los titulados de la enseñanza superior representan apenas una cuarta parte de los funcionarios que han dejado el sistema educativo desde hace menos de cinco años. No obstante, en los años siguientes, esta proporción alcanza cerca del 20%. A partir de la mitad de los años 1990, representan cada año más del 40% de las nuevas contrataciones de la función pública. En algunos años, como consecuencia de la recesión, la diferencia entre el nivel de formación de los jóvenes contratados de la función pública y el de los jóvenes contratados del sector privado se incrementa brutalmente. El excedente de titulados de la enseñanza superior empleados en la función pública pasa de 15 puntos antes de la crisis a cerca de 30 puntos en la mitad de los años 1990. Desde un punto de vista sociológico, al término de la recesión, la función pública y el sector privado no tienen nada en común.

La colisión entre la recesión económica y una política educativa voluntarista crea en algunos años un desequilibrio inédito

entre el nivel de formación de los asalariados del sector público y el nivel de sus puestos de trabajo, así como una divergencia entre las carreras profesionales y las de los jóvenes titulados del sector privado. Estos desequilibrios tendrán consecuencias sociológicas y políticas muy profundas.

El rechazo de la desclasificación

Se consideran a los sobre-titulados en general y a los de la función pública en particular como unos desclasificados. No en vano, no se trata de personas que han padecido una pérdida de estatus profesional. En cierto sentido, son todo lo contrario de unos desclasificados: han adquirido un estatus prestigioso al término de una competencia escolar muy dura. No lo han perdido de ninguna manera y les permite incluso indirectamente progresar en las jerarquías sociales objetivas, mientras que la crisis se eterniza y fragiliza a las demás fracciones de las clases medias y populares. Lo que caracteriza a estos asalariados, no es la desclasificación, sino el rechazo de cualquier perspectiva de desclasificación, y el sentimiento de injusticia ante un cuestionamiento de su estatus. Este sentimiento es aún más radical que el logro de este estatus ha sido costoso en términos de esfuerzos educativos y de sacrificios profesionales.

La reticencia de las nuevas generaciones de funcionarios ante la reforma del Estado no está alimentada por el resentimiento del que ha perdido su estatus. Expresa, por el contrario, la revuelta de unos jóvenes asalariados que rechazan cualquier perspectiva de desclasificación y cualquier erosión del estatus que tenían en el momento en el que han entrado en la función pública. Cuando se reprocha a los asalariados del sector público su estatus de "privilegiados", no se tiene en cuenta el coste que han pagado en términos de descalificación a la entrada en el mercado laboral para lograr el estatus tan codiciado de funcionario; coste aún más elevado que el

nivel de desempleo es elevado en el sector privado. Una vez que se toma en consideración este factor, se comprende mejor por qué es tan difícil negociar una reforma del estatus de los funcionarios o simplemente una reforma del Estado: esta es percibida como una ruptura de contrato. En el caso de los jóvenes sobre-titulados, cualquier reforma significa pedirles que renuncien precisamente a todo para lo cual han sacrificado sus años de formación inicial.

Es difícil comprender las movilizaciones sociales del invierno de 1995 si se interpretan como la llamada al socorro de personas desclasificadas que han perdido su estatus en la sociedad. Por el contrario, este movimiento es llevado a cabo por unos trabajadores que han alcanzado un objetivo muy codiciado y cuya energía militante se dedica desde entonces a la defensa de este logro. En ese sentido, no aceptan que se busque aumentar el número de años necesarios para poder jubilarse y que se modifiquen los regímenes especiales en vigor en las grandes empresas estatales.

Auge de un sindicalismo de resistencia

Modificando profundamente la sociología de la función pública, la recesión de 1993 ha contribuido a transformar el paisaje sindical francés, que se ha enriquecido de una corriente radical opuesta a la gestión compartida y a las reformas. Anclado en la función pública, este sindicalismo se posiciona como el último defensor del estatus de los funcionarios. Su auge toma al contrapié las centrales sindicales tradicionales, especialmente la CFDT, que intentan entonces implantarse en el sector privado, sobre todo en los nuevos sectores: servicios y comercio.

Uno de los catalizadores de un rebrote sindical ha sido el plan de reforma de las jubilaciones y de la Seguridad social presentado en noviembre de 1995 por Alain Juppé, entonces Primer ministro. Tratándose de la Seguridad social, el plan propone enmarcar por la ley la progresión

anual de los gastos sanitarios; enfoque denunciado por sus oponentes como estrictamente contable. En lo que se refiere a las pensiones, preconiza aumentar de 37,5 a 40 el número de años de cotización necesarios para que los funcionarios puedan beneficiarse de una pensión completa, es decir una equiparación del sector público con el sector privado. El plan Juppé propone igualmente equiparar los regímenes de jubilación especiales en vigor en la SNCF y en el RATP al régimen general.

Estos proyectos de reforma intervienen mientras que una huelga unitaria masiva ha tenido lugar en el inicio del mes de octubre de 1995 para protestar contra la congelación de los salarios previstos en la función pública en 1996. A partir del 25 de noviembre, los agentes ferroviarios de la SNCF se ponen en huelga, seguidos por los agentes de la RATP. Su movimiento durará tres semanas, bloqueando el país y dando al movimiento social una amplitud desconocida desde el mayo de 1968. El 11 de diciembre, Juppé renuncia a la reforma de los regímenes especiales y, el día 15, retira la totalidad de su proyecto de reforma relativa a la jubilación de los funcionarios. Las huelgas cesan y la movilización social refluye rápidamente, sin que Juppé tenga que retirar su plan de ahorro para la Seguridad social.

Que se contemple desde el punto de vista de sus premisas o de su desenlace, el movimiento de diciembre de 1995 se refiere fundamentalmente al estatus de los funcionarios y a sus logros sociales. La recesión suscita unos proyectos de reforma y de restricción presupuestaria que provocan el descontento de una amplia parte de la función pública. Más de 6 millones de días de huelga son contabilizados, aunque los dos tercios de estas huelgas hayan tenido lugar en la función pública. La izquierda sale en pedazos de ese conflicto, dividida entre un polo reformista, fiel a la CFDT y favorable al plan de reforma, y un polo radical que ha movilizado a toda su

militancia y que, como contrapartida, se ha beneficiado de su dinamismo.

El movimiento de 1995 conduce al nacimiento de nuevos sindicatos y especialmente de SUD (Solidarios, Unitarios y Democráticos), sobre todo en los ámbitos del transporte ferroviario y de la educación. Un poco más tarde, nuevas secciones sindicales de SUD se crean en el ministerio del Trabajo. No se trata a propiamente dicho de una novedad en el paisaje sindical francés ya que los primeros sindicatos SUD han aparecido algunos años atrás, al final de los años 1980, en el sector de la sanidad y del correo. Están inicialmente compuestos por antiguos militantes de la CFDT, decepcionados por el giro reformista de la central a lo largo de los años 1980. A partir de 1995, sin embargo, la influencia y los efectivos de los sindicatos SUD aumentan rápidamente, conduciendo a la creación de una unión que federa los diferentes movimientos. En 1998, reivindica a 60.000 socios. Estos empleados de correos o inspectores de la función pública desean defender su estatus.

En cierto sentido, hay algo ineluctable en el desencadenamiento que ha hecho sucederse la recesión, la radicalización de la función pública y el movimiento social. En la estela inmediata de una recesión, los ingresos fiscales disminuyen y la presión sobre el gasto público y los funcionarios se incrementa. El Estado carece de recursos en el momento preciso en el que los necesita para ayudar a las clases medias del sector privado, directamente amenazadas por los despidos y las pérdidas de estatus. Pero, simultáneamente, las nuevas cohortes de funcionarios están, más que las precedentes, apegadas a su estatus, sésamo para el cual han consentido grandes esfuerzos, precisamente para escapar a la recesión. Resulta de todo ello una contradicción sociológica fundamental, en el corazón de cualquier recesión, entre las élites en el poder y los pequeños y medianos funcionarios que hacen funcionar la máquina estatal. Esta contradicción es

aún más aguda ya que las clases medias del sector privado constituyen la principal base electoral de los dirigentes. El conflicto del invierno de 1995, así como sus consecuencias sindicales y políticas, ilustra con claridad esta realidad.

El valor de los títulos en cuestión

Tanto durante la recesión de 1993 como en la actual, el tema de la infravaloración de los títulos académicos irrumpe en el debate público, como sucede a menudo con las nociones vagas o mal definidas. El número de titulados se habría multiplicado de manera notable con respecto a los empleos disponibles y habría perdido su ventaja con respecto a los no-titulados. Los títulos académicos estarían actualmente completamente desvalorizados en la medida en que su consecución ya no permitiría acceder a unos estatus a los que estaban asociados en el pasado. Ese análisis es movilizadizo a menudo para estigmatizar y desacreditar las políticas de democratización de la enseñanza. De hecho, conduce a invertir las prioridades educativas: convendría conceder menos títulos, seleccionar más a los estudiantes y facilitar las orientaciones hacia la vida activa.

En todo caso, es incuestionable que los titulados han visto su número aumentar considerablemente, mientras que disminuye el de las personas desprovistas de cualquier título académico. En la mitad de los años 1970, entre las personas que han integrado el mercado laboral desde hace menos de cinco años, la cantidad de jóvenes sin título era cuatro veces más importante que el de los titulares del bachillerato. Hoy en día, las proporciones se han invertido, ya que los jóvenes sin título son cuatro veces menos numerosos que los titulados de la enseñanza superior y tres veces menos numerosos que los titulados del bachillerato. El incremento vertiginoso del número de titulados en circulación en el mercado laboral no se ha acompañado de su desvalorización sino de un fortale-

cimiento de las ventajas estatutarias a las que dan acceso. Nos encontramos ante una paradoja: los estatus escolares se convierten en cada vez más desiguales con la democratización del sistema educativo. La cuestión debe ser desplazada: la fuente del malestar no estriba en la pérdida de estatus padecido por los titulados, sino, por el contrario, en el valor considerable que los titulados han acabado adquiriendo y la pérdida que supone el fracaso escolar. En este sentido, se trata más de un temor de la desclasificación que de una desclasificación efectiva.

Títulos académicos y riesgo de desempleo

La cuestión del valor de los títulos puede formularse de diferentes maneras². En el contexto francés, donde las desigualdades son ante todo unas desigualdades ante el empleo, es legítimo empezar por analizar la ventaja de los titulados ante el riesgo de desempleo: ¿la protección relativa de la que se benefician los titulados ha disminuido con el aumento de su número y con la facilidad de contratación de las empresas? Para aclarar esta cuestión, se puede comparar la evolución del desempleo de los jóvenes titulados y de los jóvenes no titulados entre 1975 y 2008, es decir durante un periodo en el cual los primeros se han sustituido masivamente a los segundos en las empresas. Indica, no tanto una erosión tendencial del estatus de los titulados, sino un incremento claro de su ventaja sobre los no-titulados de la enseñanza superior en materia de acceso al empleo. La vulnerabilidad creciente de los jóvenes sin cualificación entre los desempleados con respecto a los titulados de la enseñanza superior era superior a 10 puntos en la mitad de los años 1970: supera hoy en día los 40 puntos, es decir una multiplicación por cuatro en treinta años. La ventaja de los titulares de un bachillerato sobre las personas sin título ha progresado igualmente, aunque sea en menor medida.

Encontrar un empleo a la salida del sistema educativo nunca ha sido fácil, incluso para los titulados de la enseñanza superior. Sus dificultades de inserción no se han deteriorado a lo largo del tiempo, mientras que su número aumentaba de manera notable. En 2008, alrededor del 7% de los titulados de la enseñanza superior se encuentran en el paro, es decir menos que hace 10 o 20 años y casi tanto que hace 30 años. A lo largo de estas tres décadas, las empresas se han transformado profundamente y el número de empleos ofrecidos a los titulados ha aumentado en el mismo ritmo que su cantidad a su salida de la Universidad. Por el contrario, a medida que las fábricas se informatizaban y se deslocalizaban, la situación de no-titulados se deterioraba a pesar de que sean cada vez menos numerosos.

En este contexto, el imperativo de no fracasar en la escuela no ha disminuido, sino que se ha convertido en un peso aun mayor. Lo que mina hoy en día a las familias, no es el hecho de que los esfuerzos de las familias no se vieran recompensados. Tampoco se trata de la desvalorización del éxito escolar y de la generalización de la desilusión, sino, por el contrario, del reto desmesurado que reviste la competencia escolar: cada año, se convierte en cada vez más fundamental conocer el éxito escolar y este peso pesa más que nunca sobre las espaldas de los alumnos.

Títulos y precariedad laboral

Los titulados se benefician de ventajas crecientes sobre los no-titulados en la entrada en el mercado laboral, pero ello no significa que sus posiciones mejoren durante sus carreras, después de que cada uno haya tenido la oportunidad de demostrar sus capacidades. Durante los años posteriores a la salida de la escuela, los jóvenes se enfrentan a unos problemas de inserción muy específicos. Deben ganar la confianza de los empleadores, reticentes a darles una oportunidad puesto que no tie-

nen ninguna experiencia. Gracias a sus créditos escolares, los titulados superan esta prueba con una facilidad creciente, pero ello no supone una ventaja duradera. De hecho, se presentan a menudo a las nuevas generaciones de titulados como a unas "generaciones precarias" que, incapaces de estabilizarse, viven gracias a la ayuda de sus padres durante un largo período después de su salida del sistema educativo. Los titulados se benefician de un *a priori* favorable en el momento de las contrataciones y el efecto de este *a priori* favorable aumenta cuando el fracaso escolar se convierte en algo más estigmatizante para los no titulados. Pero, quizás, se trata de una ventaja temporal, rápidamente disipada después de que los empleadores hayan visto actuar a sus nuevos empleados.

Estas hipótesis están desmentidas por los datos. Cuando se analiza el período 1975-2008, la vulnerabilidad ante el desempleo de las personas salidas desde hace 5 y 10 años de la escuela, se observa un nuevo incremento de más de 30 puntos de la ventaja de los titulados sobre los no-titulados; este aumento es tan importante que la que se observa en los 5 años posteriores a la salida del sistema educativo. Tanto hoy en día como hace treinta años, la tasa de desempleo se convierte rápidamente en algo residual después de algunos años de carrera, mientras que es cada vez menos el caso para las personas menos tituladas. La ventaja creciente de los titulados frente al desempleo se manifiesta no solamente durante los primeros años de la vida activa, sino a lo largo de toda la carrera profesional. No es cuestión de un crédito concedido provisionalmente a los galardonados de los mejores títulos universitarios, sino de una confianza que resiste al paso del tiempo.

Si la ventaja inicial concedida por el título perdura a lo largo de toda la carrera profesional, es que los jóvenes titulados no tienen solamente un acceso mucho más rápido al empleo, sino que conquistan igualmente mucho más rápidamente

un empleo estatutario, con los efectos de protección que ello implica. Las encuestas longitudinales del Centro de estudios y de investigaciones sobre las cualificaciones muestran sin ambigüedad que los jóvenes titulados conocen mayores promociones profesionales y unas transiciones hacia un contrato indefinido que los no-titulados a lo largo de los años que siguen su entrada en el mercado laboral³. En 2005, para la generación salida de la escuela en 1998, la proporción de contratos indefinidos es del 86% para los titulados de la enseñanza superior frente al 51% para los no-titulados. Además, contrariamente a lo que se afirma a menudo a propósito de las nuevas generaciones, la ventaja adicional de los titulados no se ha erosionado; incluso ha tenido cierta tendencia a incrementarse. Cuando se restringe el análisis a las personas que ocupan un empleo y que se compara la evolución de su vulnerabilidad ante los contratos definidos o la interinidad, se llega a la misma constatación que con el desempleo: el aumento de los contratos temporales concierne sobre todo a los menos titulados. Si se entiende por desclasificación el hecho, para los jóvenes titulados, de caer al mismo nivel de vulnerabilidad ante la precariedad que los no-titulados, los hechos contradicen esta afirmación. Más aún, durante las últimas décadas, esta diferencia se ha reducido en lugar de incrementarse⁴. La paradoja es que, de hecho, el coste de un fracaso escolar ha aumentado considerablemente: del título depende no solamente la inserción profesional en el inicio de la vida activa, sino toda la trayectoria social.

Títulos y acceso al estatus de cuadro

Según una idea muy extendida, hoy en día, las nuevas generaciones de titulados estarían cada vez más confinadas a unas tareas indignas de su rango. Es incuestionable que el tipo de empleo ocupado, tanto en Francia como en otros países, es un elemento central del estatus de las personas. Los cuadros del sector privado y

público, así como las profesiones intermedias, son mucho menos vulnerables ante el riesgo de desempleo que los obreros y los empleados. Perciben unos salarios elevados, se benefician de sistemas de pensiones privilegiados, acceden más fácilmente a la formación profesional, gozan de mejores condiciones de trabajo y de mejores perspectivas de movilidad, aunque sea porque sus empleos se sitúan más a menudo en grandes empresas, dotadas de un mercado del trabajo interno. Cuando un joven dispone de títulos, tiene más probabilidades de acceder a un estatus de cuadro o de profesión intermedia, constitutivo de la clase media asalariada.

De nuevo, la cuestión se plantea de saber si esta ventaja ha disminuido a medida que los jóvenes titulados eran más numerosos. ¿Estos últimos solo han podido protegerse ante el riesgo de desempleo y de precariedad renunciando a los empleos cualificados y aceptando su relegación hacia unos puestos de trabajo de ejecución? A largo plazo, conviene matizar la respuesta. Si se continúa tomando en consideración los trabajadores que han abandonado la escuela desde hace menos de 5 años, se observa que en el inicio de los años 2000 la proporción de cuadros y profesiones intermedias es del 85% entre los asalariados titulados de la enseñanza superior, del 27% entre los titulares del bachillerato y residual entre las personas sin cualificación. Quince años más tarde, las proporciones eran casi idénticas (el 88% para los titulados de la enseñanza superior frente al 29% para los titulares del bachillerato).

Incluso desde un punto de vista cualitativo, no se observa ninguna verdadera desvalorización: la diferencia entre los titulados de la enseñanza superior, los titulados del bachillerato y los no titulados ha sido casi constante a lo largo de ese periodo. Si se remonta a los años 1970, se observa que las diferencias entre los distintos tipos de titulados eran todavía más débiles que hoy en día. Para evitar los empleos de ejecución y acceder a unos puestos de res-

ponsabilidad, so solamente los titulados de la enseñanza superior disponen de una ventaja considerable sobre los titulares del bachillerato (de 60 puntos), sino que este es más importante actualmente que hace treinta años.

Esta constatación no impide que una parte de los jóvenes titulados acepten intercambiar una plaza de cuadro en contrato temporal contra un empleo de profesión intermedia en contrato indefinido más protegido, especialmente en el sector público. En periodo de ralentización económica, los poseedores de títulos académicos son capaces de competir con personas menos tituladas para acceder a unos empleos que son más protegidos a pesar de no ser tan cualificados. El titular de un master o de un doctorado de derecho puede superar una oposición de la categoría B de la función pública (intermedia) y empezar su carrera como interventor en una administración central. Lo contrario es mucho menos probable ya que, en periodo de crecimiento o de recesión, una persona salida de manera prematura del sistema educativo apenas tiene posibilidades de superar una oposición de nivel B de la función pública. Los titulados se adaptan a todas las formas de empleo existentes y relegan los menos titulados a los segmentos más inestables del mercado laboral.

Esta capacidad de adaptación es especialmente solicitada durante las recesiones, como la de 1993. Pero, incluso durante estos periodos, se caracteriza menos por una desclasificación padecida que por una estrategia de repliegue sobre la función pública. No en vano, este sector no tiene una capacidad de absorción ilimitada y el porcentaje de los titulados de la enseñanza superior ha acabado por estancarse a partir del final de los años 1990. Puesto que la creación de puestos de trabajo muy cualificados ha empezado de nuevo en el sector privado, la proporción total de los jóvenes asalariados sobre-titulados en la economía ha empezado a disminuir a medida que se alejaba el recuerdo de la recesión. Entre los

jóvenes que han abandonado el sistema educativo desde hace menos de cinco años, la proporción de titulados de la enseñanza superior que ejercen un oficio de empleado o de obrero, después de haber superado el 21% en los años posteriores a la recesión, ha vuelto al 15% en el inicio de los años 2000, es decir que ha vuelto a los niveles del inicio de los años 1980. Por el contrario, la proporción de titulares del bachillerato que consiguen acceder a un empleo de cuadro o de profesión intermedia, después de haber caído bajo el umbral del 20% tras la recesión, se ha restablecido en el 30%, como en el inicio de los años 1980.

La persistencia de una tasa de desempleo relativamente débil para los titulados no constituye la contrapartida a la erosión de la calidad de los empleos a los que aspiran. Por el contrario, el estatus de los titulados en las empresas se ha reforzado en el mismo tiempo en el cual conseguían, mejor que los demás, conservar su puesto de trabajo. En este sentido, la transformación de las empresas y el auge de las incertidumbres profesionales han concernido en primer lugar a los puestos de obreros y de empleados, y los jóvenes consiguen evitar este segmento del mercado laboral en la medida en que son titulados.

Sea cual sea la manera según la cual se define y se mide el estatus en el empleo, el fenómeno fundamental no es la pérdida de valor de los titulados, sino más bien la desventaja creciente que representa la ausencia de título. Hoy más que nunca, el título académico permite evitar el desempleo o la relegación social hacia los puestos de ejecución. No conviene sobrevalorar las tensiones sociales y psicológicas que esta lógica impone al conjunto de las familias, incluso a la inmensa mayoría de las que, en fin de cuentas, consiguen evitar cualquier forma de desclasificación escolar a sus hijos.

Los desengaños de la fluidez escolar

Numerosos observadores consideran como evidente que la "ascensor social no

funciona", para designar el hecho de que las dificultades sociales penalizan cada vez más a los hijos de las clases populares y medias. El estatus social de los padres se convertiría en un aspecto cada vez más decisivo para el futuro de los hijos y su éxito escolar perdería cualquier valor. Las familias de las clases medias y populares no recibirían la recompensa del esfuerzo escolar consentido, mientras que las familias de las clases superiores solo tendrían que movilizar a sus redes relacionales para transmitir un mejor estatus social a sus hijos. A menudo, estas representaciones son instrumentalizadas para justificar la supuesta desconfianza de las clases medias y populares acerca de las instituciones en general y de la escuela en particular: las promesas realizadas a las familias en cuanto al futuro de sus hijos no habrían sido respetadas.

Desde 1982, la *Encuesta empleo* del INSEE ofrece una información detallada sobre el origen social de cada persona interrogada y permite comparar la vulnerabilidad ante el desempleo de los jóvenes provenientes de diferentes entornos sociales. Se observa que los hijos de obreros y de empleados son más vulnerables ante el desempleo que los hijos de cuadros y de profesiones intermedias, especialmente en el inicio de la vida activa. Durante el periodo 1982-2008, entre las personas que han abandonado el sistema educativo desde hace 5 años, el 24% de los hijos de obreros se encuentran en el paro, frente al 16% de los hijos de profesiones intermedias y el 13% de los hijos de cuadros. Los hijos de las clases populares conocen un menor éxito que los jóvenes de los entornos favorecidos y ello se traduce por unas importantes dificultades de inserción.

Pero los datos de la *Encuesta empleo* indican igualmente que estas desigualdades ante el desempleo tienen cierta tendencia a disminuir con el transcurso del tiempo. En el inicio de los años 1980, entre los jóvenes que han abandonado la escuela desde hace menos de cinco años,

cerca de un tercio de los hijos de obreros se encuentran en el paro, frente al 27% de los hijos de empleados, el 20% de los hijos de profesiones intermedias y solamente el 15% de los hijos de cuadros. Veinte años más tarde, en 2008, la vulnerabilidad ante el riesgo de desempleo sigue dependiendo mucho del origen social, pero las diferencias han disminuido notablemente entre los hijos de cuadros (10%), de profesiones intermedias (13%), de empleados (16%) y de obreros (19%).

De hecho, los principales beneficiarios de la democratización de la enseñanza secundaria y de la reducción de las salidas del sistema educativo sin ningún título son efectivamente los hijos de obreros y de empleados así como de las clases medias. Hoy en día, deben enfrentarse a un mercado laboral especialmente tenso, pero su hándicap con respecto a los hijos de las clases superiores es menos importante que el que padecían sus propios padres en el mismo momento de su carrera. Desde este punto de vista, no se puede hablar de desclasificación de los hijos de las clases populares y medias ya que su situación ante el desempleo ha mejorado tanto en valores absolutos como con respecto a los hijos de las clases superiores. Continúan padeciendo unas tasas de desempleo más elevadas, pero su situación ha mejorado con respecto a los de hace veinte o treinta años.

Origen social y acceso a los empleos cualificados

Para las familias, el desempleo de sus hijos representa una amenaza real. El confinamiento a unas tareas de ejecución y a unos puestos de trabajo que exigen poca cualificación, representan otro riesgo. Los jóvenes provenientes de las clases populares han superado una parte de sus dificultades a las cuales se enfrentaban para acceder a un puesto de trabajo. Pero, ello no significa que en el seno de las empresas su posición haya mejorado con respecto a

los jóvenes provenientes de las categorías favorecidas. Las dificultades escolares de los hijos de las clases populares los condenan no solamente a una vulnerabilidad adicional ante el desempleo tras abandonar el sistema educativo sino igualmente, una vez el empleo conseguido, a una relegación hacia unos puestos de trabajo poco cualificados.

De nuevo, la *Encuesta empleo* aporta sobre esta cuestión unas aclaraciones. En el inicio de los años 1980, entre los hijos de cuadros salidos de la escuela desde hace menos de cinco años, el 30% ya tienen un estatus de cuadro y una proporción superior (63%) un estatus de profesión intermedia. En la misma época, solamente el 15% de los jóvenes asalariados provenientes de los entornos obreros se han convertidos en cuadros o en profesiones intermedias, así como el 24% de los hijos de empleados. La inmensa mayoría de los hijos de los entornos modestos (8 sobre 10) ocupa, por lo tanto, unos puestos de ejecución, frente a un poco más del tercio de los hijos de cuadros. El periodo de posguerra está considerado a menudo como la época dorada de la movilidad social, aunque la realidad sea bien diferente: al término de los Treinta Gloriosos, un abismo considerable separa a los jóvenes de las familias obreras y a los jóvenes provenientes de entornos favorecidos. En la mitad de los años 1970, la probabilidad de acceder a los puestos de trabajo más cualificados de las empresas y de las administraciones varía de 1 a 5 entre los hijos de obreros y los hijos de cuadros, y de 1 a 3 entre los hijos de empleados y los hijos de cuadros.

En 2008, las desigualdades entre entornos sociales siguen siendo importantes, pero conviene observar que han retrocedido considerablemente. La probabilidad de acceder a los puestos de trabajo muy cualificados solo varía de 1 a 2 entre los hijos de obreros o de empleados y los hijos de cuadros: las diferencias han sido divididas por dos en 25 años. A lo largo de las décadas, los hijos de los diferentes entor-

nos sociales tienen dificultades crecientes para acceder a unos empleos muy cualificados, pero la mejora ha sido todavía más rápida para los hijos de las clases populares y medias que para los hijos de las clases superiores.

La situación de los hijos de cuadros ha mejorado considerablemente a lo largo del tiempo puesto que, en 2008, cerca de las tres cuartas partes son cuadros o ejercen profesiones intermedias durante los cinco años que siguen su salida del sistema educativo, es decir un beneficio de 10 puntos con respecto al inicio de los años 1980. No en vano, contrariamente a una idea extendida, esta mejora no se ha producido en detrimento de los hijos de las clases populares. En realidad, se ha producido todo lo contrario: el avance de la calidad de la inserción profesional de los jóvenes provenientes de las clases superiores no ha impedido que la de los obreros y empleados mejore todavía más. En 2008, entre los jóvenes trabajadores hijos de obreros, cerca del 32% son cuadros o profesiones intermedias (+19% con respecto a 1982), mientras que, entre los hijos de empleados, la proporción es del 45% (+21%).

Tanto desde el punto de vista de la vulnerabilidad ante el desempleo de inserción como del acceso a los empleos más cualificados en el inicio de carrera, todos los entornos sociales han visto la situación de sus hijos mejorar con respecto al inicio de los años 1980. Se observa incluso un fenómeno de recuperación para los entornos modestos cuyas perspectivas han progresado más que los demás. Las políticas de democratización escolar no han hecho desaparecer todas las formas de desigualdades en la sociedad francesa, pero han contribuido a reducir las diferencias entre los jóvenes de los diferentes entornos sociales, especialmente en el momento de la entrada en el mercado laboral. Los hijos de obreros siguen siendo más vulnerables ante el desempleo y la marginación social que los hijos de cuadros, pero en unas

proporciones menores que hace veinte o treinta años.

Los hijos de cuadros son cada vez más numerosos en el seno de cada generación y su situación mejora lentamente. Por el contrario, los jóvenes provenientes de las familias obreras son cada vez menos numerosas y su situación mejora con una mayor rapidez. Las jerarquías sociales siguen existiendo, pero disminuyen. El malestar francés no proviene por lo tanto de una pérdida de valor de los títulos al provecho del origen social, sino de todo lo contrario: las protecciones procuradas por el estatus social de los padres se difuminan en el mismo tiempo en el cual los títulos académicos se convierten en cada vez más cruciales. Como consecuencia de todo ello, el temor ante el fracaso escolar se incrementa en todos los entornos sociales, pero en ninguna parte tanto como en las clases superiores de la sociedad. En este sentido, la democratización del sistema educativo ha provocado un incremento de la competencia escolar y la persistencia de desigualdades sociales muy profundas⁵.

CONCLUSIÓN

Francia es hoy en día uno de los países occidentales en el cual los ciudadanos están cada vez más preocupados por su futuro personal y la de su país. La sociedad francesa tiene miedo y esta ansiedad está en el origen de las estrategias individuales y de las políticas públicas que, en fin de cuentas, alimentan el miedo. Cada recesión refuerza cada vez más este círculo vicioso. La idea que el temor puede estar en el fundamento del orden social no es nueva. Se encuentra en la obra de Hobbes, para el cual el miedo ante la muerte por asesinato conduce los seres humanos a conceder al Estado el monopolio de la violencia legítima. Pero, la angustia puede convertirse igualmente en un principio de gobierno. Una amplia parte de la acción política consiste en generar unos temores, lo que justifica la puesta en marcha de programas políticos e

ideológicos preestablecidos. Tanto en Francia como en otros países, en una democracia o bajo un régimen autoritario, el temor es el instrumento privilegiado de las élites políticas, económicas, religiosas o sindicales para legitimar su acción o su poder⁶.

Sucedee lo mismo con el temor de la desclasificación ya que representa un reto político fundado a la vez sobre hechos reales y es objeto de manipulaciones. Los partidarios de un sistema educativo más selectivo exageran a menudo el fenómeno de desclasificación que padecen algunos titulados. Asimismo, los comentaristas deseosos de justificar la desconfianza de las clases populares hacia las instituciones denuncian la desclasificación desmoralizadora padecida por los hijos de las familias modestas en la escuela y posteriormente en el mercado laboral. Por el contrario, ciertos responsables políticos, de izquierdas, tienen la tentación de insistir de manera desmesurada sobre la desclasificación de las clases medias para conseguir sus sufragios. Una desclasificación es una injusticia, una promesa de la sociedad no respetada, una ruptura de contrato. Por lo cual, aunque ciertas movimientos estén interesados en exagerar las diferentes formas de desclasificación, para poder presentarse posteriormente como unos vengadores. En este sentido, la amplitud y los contornos exactos de la desclasificación representan un reto de primera importancia.

Sea cual sea la parte de la ideología y el verdadero contenido en los discursos sobre esta cuestión, todos se olvidan del hecho de que el miedo de la desclasificación afecta en primer lugar a las clases sociales más favorecidas. El temor ante el fracaso, el declive y la decadencia es perceptible en las estrategias desplegadas hoy en día por las categorías medias y superiores para proteger a sus hijos y mantener su rango. Las familias más ricas y más tituladas nunca han sido tan activas sobre los mercados escolares y residenciales; jamás han huido con tanta diligencia la proximidad de las clases populares; jamás han conce-

dido tanta importancia al entorno social y escolar en la cual crece y forma su progenitura. El temor de la desclasificación es una de las pasiones más obsesivas a la cual se libran las poblaciones que viven en el ghetto francés⁷.

La preocupación de las familias más favorecidas explica igualmente la presión que ejercen para que se mantengan las clases de niveles en los colegios y liceos. Bajo el pretexto de reservar las optativas de las lenguas más exigentes a los mejores alumnos, estas clases permiten separar los buenas y malos alumnos: es la manera según la cual la institución puede ayudar las familias más favorecidas a evitar las más desfavorecidas. Cuando los directores de los colegios no responden a esta demanda explícita y tácita, ven, tras las primeras dificultades, sus mejores alumnos huir hacia la privada. El fracaso escolar jamás ha sido tan perjudicial que hoy en día y los padres más adinerados y mejor informados han integrado perfectamente el rol fundamental del contexto social para hacer frente a este riesgo. El temor está en el origen de la segregación urbana. Provoca asimismo una segregación escolar entre los diferentes colegios y liceos de una región y, en el seno de cada centro, entre las diversas secciones y las distintas clases ofrecidas a los niños. Desde hace treinta años, este temor conduce al fracaso de las políticas de diversidad social y de democratización del sistema educativo.

En la mayoría de los casos, estas estrategias familiares conocen el éxito, puesto que el acceso a las instituciones de élite del sistema educativo francés sigue siendo la exclusividad de los hijos de ingenieros y de profesores. Pero, el precio a pagar para la sociedad acaba siendo considerable. Tanto actualmente como en el inicio de los años 1970, las Grandes Escuelas acogen a una pequeña fracción de cada generación (menos del 1%). Se podría concluir de todo ello que no hay nada nuevo bajo el sol de la aristocracia francesa. En realidad, las cosas han cambiado mucho porque, entre estas

dos fechas, la proporción de titulares del bachillerato en cada generación ha sido multiplicada por tres. Una gran parte de la selección que tenía lugar anteriormente antes del liceo se produce hoy en día después del bachillerato. En el absoluto, si el sistema de las Grandes Escuelas no es más selectivo que antes, selecciona cada vez más sin piedad a la población que accede a la enseñanza superior. Las desigualdades en el acceso a las mejores posiciones sociales siguen siendo relativamente estables en el tiempo pero resultan de ahora en adelante de una competencia mucho más larga y generalizada, lo cual implica por parte de las familias unas estrategias cada vez más complejas y de larga duración. El maltusianismo escolar jamás ha generado tanta ansiedad y lucha.

Polarizando el espacio y haciendo más palpable la amenaza del despido, tanto la crisis actual como las precedentes aumentan el temor de la desclasificación. Por primera vez desde hace treinta años, una mayoría de franceses considera que sus condiciones de vida se deteriorarán en los futuros años. En este contexto deprimido, es probable que los jóvenes titulados participarán masivamente en las oposiciones de la función pública. Una nueva generación de funcionarios sobre-titulados aparece en el mismo momento en el cual los déficit públicos se incrementan y la presión sobre la función pública se aumenta. Es igualmente previsible que las políticas públicas concederán nuevas protecciones a los asalariados que ya están protegidos. En este ámbito, las mejores intenciones resisten difícilmente al principio de realidad política y social.

¿El temor de la desclasificación, en el contexto francés, es ineluctable? ¿Se debe denunciar esta forma de paz social que constituiría una competencia un poco menos precoz y generalizada? No sería conveniente que los resultados presentados en este artículo conduzcan a acomodarse de desigualdades bajo el motivo de que son antiguas y que los reflejos segrega-

cionistas están solidamente anclados en el seno de la población. Numerosas ideas circulan desde hace tiempo, cuya aplicación podría desactivar el reto de los estatus y la ansiedad social que desemboca de todo ello. Una iniciativa interesante, "el sistema universal de dotación inicial", consiste en dar a cada persona (el año de su mayoría de edad) un capital de meses de formación en el cual puede escoger a lo largo de su vida. Utilizando esta dotación, el individuo se beneficia de una beca de estudios, de facilidades de crédito, etc. Semejante sistema se está implementando tanto en Suecia, en Holanda como en Dinamarca. El reparto de estas dotaciones, utilizables en cualquier momento, contribuiría a hacer menos irreversibles las sanciones escolares y menos angustiosa la perspectiva de un despido. Pero, es poco probable que vea la luz en Francia porque es costoso y tienen varias debilidades, entre las cuales el que presupone que cada individuo tiene la capacidad de ser el emprendedor de su vida.

Adaptar con éxito unas innovaciones tan radicales supone transformar completamente la forma de imaginar el éxito social. Es precisamente donde reside uno de los obstáculos fundamentales. Las sociedades de estatus tienen como especificidad de someter a sus miembros a una pequeña sucesión de momentos claves, de episodios críticos en los cuales todo se juega. Adquirir un estatus, tan modesto que sea, representa una forma de elección al término de la cual el beneficiario se encuentra investido, para el resto de su vida, de un suplemento de identidad social. Solamente una desclasificación podrá, posteriormente, amenazar esta identidad adicional. En este sentido, el temor de la desclasificación reviste una dimensión existencial. Las sociedades de estatus como la francesa instalan en la vida unos retos de vida y de muerte social. Despiertan así entre sus miembros un vínculo romántico a las jerarquías de todo tipo aunque los convierten en indiferentes ante la exactitud de los modelos sociales en

los cuales los ciudadanos difieren no tanto desde el punto de vista de la nobleza social como de las semanas que les quedan sobre una cuenta de formación o de los puntos de jubilación que han acumulado. El ingrediente decisivo para reconciliar la sociedad francesa con sí misma e evitarle caer en la depresión social no es tanto el genio tecnocrático como el voluntarismo político.

BIBLIOGRAFÍA

- BAUDELLOT, C., ESTABLET, R. (2009), *L'élitisme républicain*. Paris : Seuil.
- COUPPIE, T., FASQUET, C., LOPEZ, A., (2007), *Quand la carrière commence*. Paris : CEREQ.
- LAGARDE, S., MAURIN, E., TORELLI, C. (1994), « Créations et suppressions d'emploi en France : une étude de la période 1984-1992 », *Economie et Prévision*, n°113-114.
- MAURIN, E. (2004), *Le Ghetto français*. Paris : Seuil.
- MAURIN, E. (2007), *La nouvelle question scolaire*. Paris : Seuil.
- RAMBACH, M. (2001), *Les intellos précaires*. Paris : Fayard.
- ROBIN, C. (2006), *La Peur. Histoire d'une idée politique*. Paris : Armand Colin.

NOTAS

- 1 LAGARDE, S., MAURIN, E., TORELLI, C. (1994), « Créations et suppressions d'emploi en France : une étude de la période 1984-1992 », *Economie et Prévision*, n°113-114.
- 2 MAURIN, E. (2007), *La nouvelle question scolaire*. Paris : Seuil.
- 3 COUPPIE, T., FASQUET, C., LOPEZ, A., (2007), *Quand la carrière commence*. Paris : CEREQ.
- 4 RAMBACH, M. (2001), *Les intellos précaires*. Paris : Fayard.
- 5 BAUDELLOT, C., ESTABLET, R. (2009), *L'élitisme républicain*. Paris : Seuil.
- 6 ROBIN, C. (2006), *La Peur. Histoire d'une idée politique*. Paris : Armand Colin.
- 7 MAURIN, E. (2004), *Le Ghetto français*. Paris : Seuil.